

## Unidad y sacrificio, ¿para quién?

A sólo unos días de que el licenciado José López Portillo iniciara su campaña electoral, la ya vieja camarilla de altos funcionarios y su *inteligencia* una y otra vez proclamaban, como la verdadera alternativa a la crisis por la que atravieza el país, el ideario del nuevo gobierno, que si bien no difiere esencialmente del anterior sí tiene su propia especificidad.

El lema "La solución somos todos", más que una frase aislada o un mero artificio propagandístico, es la síntesis de una concepción que, desde los años cuarenta, la burguesía y el partido oficial enarbolan en México como parte de su plataforma ideológica.

En efecto, Ávila Camacho, ante los problemas que acarrea la segunda Guerra Mundial, plantea como alternativa la "Unidad Nacional", que toma cuerpo en el Pacto Obrero Industrial, el que supuestamente dotaría al país de una industria propia capaz de superar el atraso y la dependencia hacia el imperialismo; Miguel Alemán, a los sacrificios que la unidad atrajo, agrega el no menor de mantener los salarios bajos y el de restringir el derecho de huelga. Mientras se sacrificaba a la clase obrera, los empresarios nacionales, aliados a la inversión extranjera directa de las empresas monopolistas principalmente norteamericanas, se apoderaban de las ramas más dinámicas de nuestra economía, obteniendo jugosas ganancias y, paralelamente, la prensa y los medios de comunicación daban rienda suelta al anticomunismo, que acompañó a la política de "guerra fría"; Ruiz Cortines sostuvo durante todo su gobierno el principio de la unidad y la conciliación de intereses; López Mateos, cuyo gobierno se autodefinió como de extrema izquierda dentro de la Constitución, marginó a todos aquellos que no profesaban su mismo credo, situándolos automáticamente en el ultraradicalismo. Como prueba evidente de los límites de su "izquierdismo" reprimió al movimiento ferrocarrilero en su lucha por lograr su independencia. Tampoco el desprestigiado gobierno de Díaz Ordaz dejó de sostener, en ningún momento, la importancia y conveniencia de la "Unidad Nacional". El régimen de Luis Echeverría desarrolló su propia versión de la unidad con la llamada "Alianza Popular", a la que hábilmente inscribió dentro de su concepción neodesarrollista, y agregó un nuevo elemento, el reconocimiento de la lucha de clases, por lo que la unidad sólo se planteó en lo esencial.

El gobierno del presidente López Portillo ha reiterado que la solución mexicana a la crisis consiste en la realización de un pacto social que no sólo concilie, sino que integre los intereses a través de una alianza para la producción; es decir, la unidad de los obreros-campesinos y empresarios bajo la coordinación del Estado. Veamos esta última versión de la unidad nacional.

*¿A qué precio paga el proletariado los sacrificios del nuevo pacto?*

En aras de la unidad se pretende hacer recaer aún más el peso de la crisis sobre los trabajadores, de esta forma se busca aumentar la tasa de beneficio del capital, con el propósito de motivar la inversión. Esta medida, ampliamente conocida y utilizada por la clase dominante, ha tomado forma en:

La disminución del salario real ante su permanente resago en relación a los precios. Mientras que el índice de precios al mayoreo en la ciudad de México se incrementó, según el Banco de México, en un 34% de septiembre del año pasado a enero del actual, y el aumento general de precios en 1976 fue del 50%, sólo una parte de los trabajadores sindicalizados recibieron el aumento de emergencia "recomendado" en 1976 por la administración de Echeverría. Frente a los pronósticos de inflación del 25% del Fondo Monetario Internacional para 1977, las revisiones de Contrato Colectivo y de salarios han logrado aumentos que fluctúan, en su mayoría, el 5.5 y el 10%, y el aumento de los salarios mínimos fue de sólo el 10%. Ello sin olvidar que en nuestro país, como el propio Fidel Velázquez lo reconoce, la participación de los salarios en el ingreso nacional es de las más bajas tanto del mundo desarrollado como del Tercer Mundo.

Otro elemento que nos ayuda a vislumbrar las características del sacrificio a que están siendo sometidos los trabajadores es el desempleo que, a partir de las devaluaciones del peso, alcanza la cifra de 600 mil nuevos desempleados, correspondiendo la carga mayor a la industria de la construcción, la automotriz y la textil; a los que hay que sumar los 7.5 millones de desempleados y subempleados existentes, lo que se traduce en el abaratamiento de la fuerza de trabajo.

El aumento de la productividad y la producción, lejos de haber redituado un incremento en los salarios, ha reforzado las ya de por sí altas tasas de ganancia, profundizando el desigual reparto del ingreso.

También el sindicalismo oficial juega su papel, y Fidel Velázquez anuncia que no recurrirá a nuevos aumentos de emergencia, por lo que algunos sectores del movimiento obrero y en particular la disidencia sindical buscan contrarrestar el deterioro de sus salarios en las revisiones contractuales, sosteniendo su lucha no sólo con los patrones de sus respectivas empresas, sino también con buena parte del aparato político e ideológico, enfrentando las manipulaciones de que es objeto la opinión pública. Así, por obvio que parezca, el movimiento sindical disidente tiene que demostrar que sus demandas por mejoras salariales son un medio para contrarrestar la pérdida de la capacidad adquisitiva y no medidas criminales, antipatrióticas. Su lucha debe cubrir, fundamentalmente, tres frentes: el económico, el político y el ideológico.

Veamos ahora las consecuencias del pacto de unidad para los empresarios por medio de algunos datos publicados en la prensa nacional y revistas especializadas.

El pacto asigna a los empresarios la reducción de utilidades y beneficios a fin de contribuir a equilibrar la sociedad. Con el objeto de evitar malos

entendidos, el vicepresidente de la CONCAMIN se apresura a señalar que el gobierno "*mantendrá las utilidades excesivas, pero con justicia*", porque justo es decirlo, las utilidades se maximizaron en las últimas tres décadas. Dicho de otra manera, la supuesta reducción de los beneficios para los empresarios no llega siquiera a la eliminación de excesos.

Por otra parte, la salida de capitales, que motivó la devaluación, alcanzó enormes volúmenes; en esta movilización participaron tanto los industriales patriotas como los apátridas, permitiendo al capital monopolista obtener pingües ganancias especulativas al amparo de la libertad de cambios. Y si bien los diversos representantes empresariales se esmeran en enfatizar que la desconfianza ha sido superada, el retorno de los capitales es mínimo y la inversión privada continúa frenada.

La dilapidación del excedente alcanza proporciones alarmantes, ya que sólo una pequeña proporción se reinvierte, lo que contribuye a que el crecimiento del nivel de empleo (2%) sea inferior a la tasa de crecimiento de la población (3.5%).

La política fiscal, que tradicionalmente ha favorecido al gran capital, continúa esta línea, no sólo manteniendo bajas tasas impositivas, sino que sostiene la pretensión de disminuirla hasta un 70% para el desarrollo industrial regional.

Existe una creciente desnacionalización de nuestra economía como consecuencia del rápido reforzamiento del capital monopolista extranjero a través de la inversión directa e indirecta. De ahí las reiteradas declaraciones de los empresarios de Estados Unidos, exaltando los beneficios de invertir en nuestro país no sólo por las plenas garantías que otorga el gobierno, sino sobre todo por las altas tasas de ganancia susceptibles de obtenerse.

En síntesis, como diría el periódico *Combate* en los años cuarentas, en curiosa analogía:

*Se parte de la base de que la única forma de fomentar la producción industrial es la iniciativa privada, a la que hay que rodear de toda clase de seguridades, concesiones y privilegios, apartando cualquier estorbo que los capitalistas privados pudieran encontrar en la legislación del trabajo, las leyes fiscales, las comunicaciones, etcétera. Para los actuales responsables de la economía nacional el país logrará una rápida industrialización con el fomento de la empresa privada, con el aumento de las posibilidades de crédito, con la derivación hacia México de los enormes capitales baratos de Norteamérica, dejando a los empresarios particulares la iniciativa de determinar qué clase de industrias conviene establecer...*

En conclusión, la burguesía mexicana, de una u otra manera, ha utilizado los llamados a la unidad que tienden a confundir a los trabajadores y a someterlos a la ideología y sobre todo a los intereses de la clase en el poder. La unidad no es posible entre clases antagónicas en una sociedad en que una

clase explota y sacrifica a otra para crecer y mantenerse. Por ello, hoy más que nunca, el proletariado tiene el derecho y la obligación como clase revolucionaria de unirse, pero al margen de la clase dominante y de su Estado, pues sólo mediante la unidad ideológica, teórica, estratégica y organizativa podrá plantear los cambios y transformaciones que el país reclama.

Febrero 17 de 1977

*Alfredo Camhaji Samra*